

## **ECUADOR**

El Ecuador es una república constitucional con una población de unos 13.8 millones de habitantes. En noviembre de 2006, Rafael Correa ganó la presidencia en la segunda vuelta de las elecciones que, en términos generales, se consideraron libres y justas. Correa asumió el poder el 15 de enero. Por lo común, las autoridades civiles mantuvieron un control eficaz de las fuerzas de seguridad.

Si bien, en general, el Estado respetó los derechos humanos de sus ciudadanos, siguió habiendo problemas en los siguientes campos: actos aislados de homicidio ilegítimo y uso de fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad; actos esporádicos de tortura, abuso y homicidio de sospechosos y presos por las fuerzas de seguridad, a veces con impunidad; condiciones precarias en las cárceles; arresto y detención arbitrarios; un elevado número de presos en régimen de detención preventiva; y corrupción y denegación de las debidas garantías procesales dentro del sistema judicial. Se acusó de asesinato, intento de asesinato, violación sexual, extorsión, secuestro y tráfico de extranjeros indocumentados a varios agentes de la Policía Nacional. Continuaron los problemas sociales, entre los que cabe citar la violencia contra las mujeres; la discriminación de las mujeres, los pueblos indígenas, los afroecuatorianos y los homosexuales; la trata de personas y la explotación sexual de menores; y el trabajo infantil.

### **RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluso libertad de:

a. Privación arbitraria e ilícita de la vida

Aunque ni el gobierno ni sus agentes cometieron homicidios por motivos políticos, se siguieron recibiendo denuncias de fuentes fidedignas de que las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva y cometieron numerosos actos de homicidio ilegítimo.

El 6 de enero, la policía arrestó a un grupo de adolescentes por pintar con graffiti una pared en el sector El Inca en la zona norte de Quito. La policía golpeó y luego liberó a uno de los jóvenes pero mantuvo detenido a Paúl Guañuna, a quien se vio con vida por última vez en una patrulla de la policía que se dirigía a una estación de policía del centro de la ciudad. El 7 de enero, se encontró el cadáver de Guañuna a poca distancia del lugar donde se le arrestó en un principio. La autopsia reveló que había muerto de traumatismo por contusión craneana y laceración del pulmón derecho, indicativos de una caída. Se inició un procedimiento penal contra Geovanny Álvarez Zambrano, Eduardo Cruz Live y Claudio Chicaiza Caiza, tres agentes de policía que estaban con Guañuna en el momento de su arresto; un juez decretó su prisión, y en junio el fiscal anunció que se les acusaría de homicidio culposo. Después de una audiencia preliminar, se acusó oficialmente de homicidio a los agentes. Al final del año, estaba pendiente una apelación de la acusación ante la Corte Suprema de Justicia de Quito.

El 12 de abril, la policía de Manta mató de un disparo a Juan Carlos Vera Faguizon de 19 años, después de un altercado. Una investigación interna de la policía condujo a acusaciones contra

Reynaldo Enrique Mendoza Roldán y Carlos René Guanotaxi Suntaxi, agentes de policía. Al terminar el año, los agentes estaban presos en espera del juicio.

Entre el 8 de enero y el 18 de junio, ocho niños y dos adultos de las Provincias de Guayas y Los Ríos fueron alcanzados por balas perdidas, en circunstancias presuntamente vinculadas con violencia de pandillas; ocho de las 10 víctimas murieron de las lesiones sufridas.

Al final del año, continuaba la investigación de la muerte de un joven participante en una manifestación estudiantil en Cuenca en abril de 2006, ocasionada por una bala perdida de una pistola de un agente de policía. También al final del año estaba en curso la investigación del homicidio de un taxista cometido en junio de 2006 por el agente de policía Miguel Ángel Chirán, fuera del horario de servicio.

En noviembre, un tribunal militar falló en el caso de dos oficiales militares acusados del homicidio de un curandero indígena en agosto de 2006 en Puyo, Provincia de Pastaza. El Tribunal sentenció a Bernardo Cervantes Santamaría Cuji a 16 años de cárcel y absolvió a Santio Mucushigua.

El agente de policía Freddy Abel Rizzo Barzola, que estaba detenido en relación con el homicidio de dos detenidos en 2005, fue asesinado en la cárcel durante el año.

A fines del año, el fiscal de Sucumbios siguió investigando las acusaciones contra los oficiales del ejército Ángel Chuya, Carlos Badillo, Benito Tangamashi y Jorge Zamora, referentes al homicidio de dos ocupantes de un vehículo, ocurrido en la Provincia de Sucumbios en 2005. Los cuatro oficiales permanecieron en régimen de detención militar.

Según informa la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la violencia colectiva contra presuntos delincuentes continuó con la intensidad del año anterior, particularmente en las comunidades indígenas y los barrios pobres de las grandes ciudades, donde la presencia de la policía es escasa.

#### b. Desaparición

No se recibieron informes de desaparición por motivos políticos.

El secuestro criminal con fines de lucro siguió constituyendo un problema en algunas regiones del país. También se recibieron denuncias de extorsión y de amenazas de secuestro de ganaderos, agricultores y empresarios a lo largo de la frontera con Colombia. Hasta diciembre, la policía registró 357 casos de secuestro y 155 casos de "secuestro expreso" (en el cual se lleva en automóvil a una persona a varios sitios y se le obliga a retirar fondos personales de un cajero automático) e hizo siete arrestos relacionados con esos actos.

#### c. Tortura y otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante

Si bien la Constitución y las leyes prohíben la tortura y formas similares de intimidación y castigo, se informa que algunos agentes de policía continuaron sometiendo a sospechosos y presos a tortura y abuso, a menudo con impunidad.

El gobierno no había tomado ninguna medida con respecto a las comprobaciones hechas en 2005 por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura a efectos de que las leyes nacionales sobre tortura no se ciñen a las normas establecidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en particular porque la definición de tortura en el código penal, que penaliza el "tormento corporal" pero no la tortura psicológica, no corresponde a la definición esbozada en dicha Convención. A menudo, se castigó a los perpetradores de tortura con una multa en lugar de prisión.

Hasta finales de diciembre, la CEDHU registró 420 casos de presunta "tortura" o "agresión física injustificada" por fuerzas de la policía.

En enero, Vicente Santana acusó a los agentes de policía Luis Luglia y Galo Rivas de Quininde, Provincia de Esmeraldas, de golpearlo sin ninguna causa. Fue hospitalizado por las lesiones sufridas. Santana alegó que la policía lo obligó a firmar una declaración jurada en la que afirmaba que no se le había golpeado. En vista de la indiferencia oficial, Santana decidió abstenerse de hacer acusaciones.

El 4 de mayo, la policía persiguió en la zona sur de Quito a un grupo de adolescentes que iban de camino a su casa después de una fiesta. Víctor Javier Tipan Caiza, de 16 años, sometido a una operación quirúrgica poco antes, no pudo escapar y afirmó que la policía lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. En la investigación interna de la policía se determinó la culpabilidad de dos agentes en la comisión del delito, pero a finales del año no se había tomado ninguna medida, y la investigación penal estaba en curso.

Según informes, el 26 de noviembre, varias comunidades mestizas e indígenas en manifestación de protesta en Dayuma, Provincia de Orellana, ocuparon y dañaron las instalaciones de Petroecuador, la empresa petrolera estatal. Después de determinar que la protesta ponía en peligro la seguridad pública y los ingresos nacionales provenientes del petróleo, el 29 de noviembre, el Presidente Correa declaró estado de emergencia en la Provincia de Orellana, envió al ejército para restaurar el orden público e invocó la ley de seguridad nacional, que autoriza a los tribunales militares a juzgar a los presos. Según informes de la CEDHU, las fuerzas armadas detuvieron ilícitamente y torturaron a varias personas, hecho negado por el gobierno. Las infracciones de un toque de queda militar ocasionaron más de 100 detenciones; aunque el gobierno declaró el 7 de diciembre que se había liberado a todos los menores, la CEDHU informó que habían desaparecido cuatro de ellos (Freddy Zambrano, Mario Zambrano, Jefferson Marcillo y Antonio Cabal). Las investigaciones continuaban a finales del año.

#### Condiciones en las cárceles y los centros de detención

Por lo general, las condiciones en las cárceles y los centros de detención eran precarias y tendían a empeorar más en las zonas costeras tropicales al compararlas con las zonas altas templadas.

El 6 de julio, el gobierno declaró un estado de emergencia de 60 días (prorrogado después a 120 días), extensivo a las 34 cárceles y centros de detención del país para abordar los problemas de infraestructura, dotación de personal y financiamiento; durante el período de emergencia asignó otros \$15 millones (el dólar es la moneda nacional) a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).

El hacinamiento constituyó un problema crónico en casi todos los establecimientos penitenciarios. Hasta octubre, la DNRS informó que había 18.218 presos en instalaciones construidas para alojar a menos de la mitad de esa cifra.

En varias cárceles hubo graves brotes de enfermedad, y a menudo la atención médica fue inadecuada. La asignación diaria para las raciones de las cárceles era de un dólar por preso; los detenidos solían complementar esas raciones comprando sus propios alimentos.

Hasta finales de noviembre, la DNRS había denunciado la muerte de 42 presos, 30 de ellos por enfermedad o por causas desconocidas, siete por lesiones graves y dos por suicidio.

Las investigaciones sobre dos muertes en la cárcel de Machala en la Provincia de El Oro no llevaron a ninguna acusación penal. Según la CEDHU, la cárcel de Machala tenía solamente 30 guardias, en tanto que la población carcelaria justificaba la asignación de un mínimo de 70 guardias. Hasta septiembre, había 450 presos en la cárcel de Machala, cuya capacidad es de 150.

El 20 de abril se encontraron muertos los presos Juan Carlos Alava Chávez e Israel Mariscal Vásquez en el Centro Penitenciario del Litoral de Guayaquil. Un informe de la policía indicó que los presos murieron de manera sospechosa, pero la causa no se había determinado al llegar el final del año.

El 1° de mayo se encontró el cadáver de Vicente Francisco Cantos Brito, que murió ahorcado en un calabozo de la sede de la Policía Judicial en Guayas. Se le había arrestado por acusaciones de robo de tumbas y las autoridades indicaron que sus compañeros de cárcel podrían haberlo matado en represalia por esos actos, pero no expidieron ningún informe de la investigación.

El 13 de mayo, unos infantes de marina que respondieron a una llamada por violencia doméstica arrestaron a Juan Lorenzo Delgado Zambrano y lo trasladaron a la estación local de la Policía Nacional. La tarde siguiente, por recomendación de las autoridades, los familiares fueron a un hospital de Porto Viejo, donde se les informó que Delgado se había caído durante una pelea con otro preso. Delgado murió después, ese mismo día. Al final del año estaba todavía en curso una investigación de los dos agentes de policía encargados de la custodia de Delgado.

Las condiciones eran mucho mejores en la cárcel de mujeres de Quito que en los presidios de hombres. Hasta noviembre, 685 niños y adolescentes cuyas madres estaban encarceladas habían sido trasladados de las cárceles a instalaciones más apropiadas; aproximadamente otros 200 de esos niños permanecían en Centros de Rehabilitación Social. Las presas en régimen de detención preventiva se mantenían con las condenadas. Según la CEDHU, se asignaba a guardas varones la responsabilidad de cuidar a las mujeres presas, y ellas declararon que los guardas las golpeaban y

acusaban de tratar de escapar. La ley estipula que las mujeres embarazadas no pueden estar detenidas en penitenciarías; con todo, muchas estaban encarceladas en lugar de estar bajo arresto domiciliario.

Aunque en la mayoría de los casos el gobierno permitía visitas a las cárceles por observadores independientes de instituciones de defensa de los derechos humanos, a veces las autoridades no permitían que esos observadores visitaran a los presos enviados a celdas de aislamiento después de que presuntamente se les había golpeado.

d. Arresto o detención arbitrarios

Si bien la Constitución prohíbe el arresto o detención arbitrarios, en febrero de 2006 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias señaló que las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, el Código Penal y algunos reglamentos adoptados por las autoridades centrales o provinciales “mina[ba]n las garantías y la protección ofrecidas”. El Grupo de Trabajo citó dos leyes que son motivo de particular preocupación. La primera impone a los jueces la obligación de ordenar la detención de las personas que esperan un juicio, es decir, la “detención preventiva”. En la práctica, esa ley llevó a detener a miles de personas por períodos más prolongados que los permitidos por la Constitución, a menudo de muchos años, en violación de su derecho a la celebración de un juicio dentro de un plazo razonable. La segunda es una medida de abolición de las reducciones del período de la sentencia, lo cual llevó a numerosas personas a cumplir sentencias por períodos prolongados por causa de delitos menores. En septiembre de 2006, el Tribunal Constitucional declaró que la disposición sobre detención preventiva era inconstitucional y afirmó que ninguna persona puede permanecer presa sin que se le dicte sentencia por más de un año por delitos penales y por seis meses por delitos menores. Para los presos ya encarcelados y para todas las personas encarceladas en el futuro esa medida entró en vigor el 23 de octubre.

Función de la policía y del mecanismo de seguridad

La Policía Nacional está subordinada a la autoridad del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades. La eficacia de la Policía Nacional se deterioró por corrupción, deficiencia en los procedimientos de contratación y falta de adiestramiento, supervisión y recursos.

El 6 de mayo, un grupo de civiles y agentes de la policía, presuntamente organizados por Edwin Marcelo Revelo, agente de la Policía Judicial, agredió a Cabrera Letty Alcivar, quien afirmó que Revelo organizó el ataque por causa de una vendetta familiar. Además de agredir a Alcivar, el grupo saqueó su casa y robó artículos de su propiedad. En una investigación policial se determinó que aunque Alcivar fue acosada, no se allanó su casa.

La Policía Nacional informó que, en 2006, 34 reclutas de la escuela de policía San José de Chimbo en la Provincia de Bolívar carecían de las calificaciones normales para ingreso y podrían haber pagado hasta \$3.000 para admisión a dicha escuela. Al final del año estaba pendiente la investigación correspondiente.

La investigación de varios agentes de policía que, en noviembre de 2006, acompañaron a algunos presos a excursiones no autorizadas a un club de entretenimiento de Quito llevó a sentenciar el 14 de noviembre a tres agentes a ocho años de cárcel y a dos agentes, cuya complicidad se comprobó, a cuatro años de cárcel.

Algunos municipios, como Quito y Guayaquil, tienen sus propias fuerzas de policía metropolitana, además de la Policía Nacional. Una oficina de asuntos internos de la policía investiga quejas contra agentes de policía y puede remitir casos a los tribunales de la policía. Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) alegaron que de vez en cuando algunos agentes de la policía metropolitana de Quito y Guayaquil se excedían en el uso de la fuerza. En ciertas ocasiones, la corrupción de la policía fue un problema.

La Policía Nacional contrató a algunas ONG para proporcionar adiestramiento sobre derechos humanos. En un informe de Amnistía Internacional publicado en 2006 se criticó el uso del sistema de tribunales de la policía y se citó la preocupación del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura de que las quejas de violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad seguían juzgándose en tribunales militares y de la policía, que no son independientes ni imparciales. Las ONG declararon que no se había registrado ningún cambio sustancial de esa situación durante el año.

#### Arresto y detención

La ley exige que las autoridades expidan órdenes de arresto específicas por escrito en las 24 horas siguientes a la detención, y las autoridades deben presentar cargos por un determinado delito penal contra el sospechoso en las 24 horas siguientes a su arresto. Dentro del plazo de las 24 horas siguientes al arresto, las personas detenidas pueden cuestionar la legalidad de su detención por medio de una petición de habeas corpus interpuesta ante el funcionario público elegido de mayor jerarquía, en la localidad donde se realiza la detención, por lo general, el alcalde; sin embargo, en la práctica se interpusieron pocas peticiones de esa naturaleza.

Manuel Xavier Cornejo Delgado alegó que, el 6 de julio, se le detuvo sin orden de arresto ni causa probable mientras iba de camino a casa con su esposa e hijo. El 7 de julio, la policía registró la casa de la madre de Cornejo Delgado, en presencia de su madre y sus hermanos, sobrinas y sobrinos. La familia sostuvo que los agentes de policía golpearon y esposaron a los hombres. Un policía presuntamente les pidió a los hombres que escogieran quién sería el primero en morir. La familia no tuvo más contacto con Manuel hasta el 19 de julio, cuando se permitió que un abogado lo visitara en la cárcel. Dos días antes del arresto de Cornejo Delgado, él había presentado una demanda contra dos agentes de policía. Al final del año no se había autorizado ninguna investigación oficial.

En caso de una detención ilegal, los alcaldes tienen el derecho de dejar en libertad al detenido, basándose solamente en cuestiones de procedimiento con arreglo al mecanismo de habeas corpus. De lo contrario, se puede dejar en libertad a un preso solamente con una orden judicial. En algunos casos, los detenidos que desconocen esta disposición, o que carecen de recursos económicos para contratar a un abogado, pueden permanecer en la cárcel por un período prolongado sin que se les juzgue. Se permite fijar una fianza solamente en el caso de delitos

menos graves, castigables con "prisión correccional", y se prohíbe hacerlo en el caso de delitos más graves relacionados con narcóticos y otros delitos graves que exigen encarcelamiento prolongado (delitos que "afectan o ponen en peligro" al público, castigables con encarcelamiento de tres a 35 años.)

Si bien la ley concede a los detenidos el derecho de acceso inmediato a abogados y familiares, hubo demoras según las circunstancias y la disposición de los agentes a aplicar la ley; por lo común, los presuntos narcotraficantes esperaron de 24 a 48 horas a que se realizaran esas visitas. Los presos con suficientes recursos a menudo sobornaron a las autoridades carcelarias para que les facilitaran el acceso. Según la CEDHU, durante el período de julio a noviembre mientras estuvo en vigor el decreto de emergencia, se detuvo a un número desconocido de personas en cárceles donde no se permitían visitas de familiares ni abogados.

Aunque la ley prohíbe la detención en régimen de incomunicación, las organizaciones de defensa de los derechos humanos siguieron denunciando violaciones esporádicas. Aun cuando la policía obtuvo una orden de arresto por escrito, las autoridades encargadas de determinar la validez de la detención a menudo permitieron que se presentaran acusaciones frívolas, ya fuera porque estaban sobrecargadas de trabajo o porque el acusador las había sobornado. A menudo se usó el sistema como medio de acoso en casos civiles, en que una parte buscó que se arrestara a la otra por acusaciones penales.

La detención en la etapa de investigación hasta el juicio y mientras dure este último es legal si un juez determina que es necesaria y si se presentan pruebas de que se ha cometido un delito. La ley limita la detención inmediata a 24 horas por *in flagrante delicto* o para permitir que comience la detención en la etapa de investigación. En la mayoría de las jurisdicciones, la detención inmediata suele ser mucho más prolongada. Si el informe de la investigación es perjudicial, el juez puede ordenar la detención preventiva, que se limita a seis meses por delitos menores y a 12 meses por delitos mayores.

La ley permite detener a los presos por un período indefinido después de formular acusaciones formales pero antes de su condena o sentencia. En su mayoría, los acusados permanecen detenidos durante la fase de investigación. Según los datos públicos, hasta julio estaba pendiente la sentencia de aproximadamente 63 por ciento de los detenidos.

e. Denegación de un juicio público justo

Si bien la Constitución estipula que el poder judicial es independiente, en la práctica el poder judicial, a veces, fue vulnerable a presión externa y corrupción. Los medios de comunicación informaron extensamente sobre la vulnerabilidad del poder judicial a sobornos a cambio de decisiones favorables y de resolución de causas legales y sobre jueces que distribuyeron casos a abogados externos quienes, por su parte, redactaron sentencias judiciales sobre casos presentados al Tribunal y las devolvieron al juez presidente para su firma. La CEDHU afirmó además que, a veces, los jueces adoptaban decisiones por influencia de los medios de comunicación o por presiones políticas y económicas.

El poder judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de circuito y otros tribunales y juzgados que celebran audiencias de casos de conformidad con la Constitución y otras leyes, y el Consejo Nacional de la Judicatura, encargado de administrar el sistema judicial y de disciplinar a los jueces. También hay tribunales militares y de la policía que tienen la misma jerarquía que los tribunales de circuito, así como juzgados penales, provinciales y cantonales. La Corte Suprema de Justicia supervisa la selección abierta y competitiva de todos los jueces de apelación.

En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo sobre la apelación presentada en 2005 por 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que habían sido sustituidos por el Congreso en 2004. La Comisión sostuvo que se podrían haber infringido los derechos de los magistrados y los derechos de los ciudadanos a quienes se denegó una Corte Suprema de Justicia funcional, y remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso seguía pendiente al final del año.

### Procedimientos de juicio

A pesar del empeño puesto en modernizar el sistema judicial, el poder judicial siguió funcionando con lentitud e incoherencia. Había prolongadas demoras antes de que la mayoría de los casos llegara a un juicio. Según informes, los jueces emitían fallos con más rapidez o lentitud como resultado de presión política y, en algunos casos, del pago de sobornos. Las deficiencias del sistema judicial contribuyeron a crear situaciones en que algunas comunidades aplicaron la ley por cuenta propia, como en el caso de la violencia colectiva contra presuntos delincuentes.

En el sistema de justicia no hay jurados. Se supone que los acusados son inocentes hasta que se compruebe su culpabilidad y que tienen el derecho a un juicio público, abogados defensores y apelación. Pueden presentar pruebas, negarse a prestar testimonio autoinculpatorio y confrontar y contrainterrogar a los testigos. Aunque exista un sistema de defensoría del pueblo, en la práctica había solamente 32 abogados de oficio para defender al gran número de acusados pobres de todo el país. Hasta el 31 de octubre había 11.187 personas encarceladas sin sentencia.

Los grupos de la sociedad civil, las asociaciones de abogados, las universidades y los donantes extranjeros buscaron apoyo para los grupos vulnerables carentes de acceso a defensa jurídica. De enero a septiembre, la asistencia de donantes extranjeros permitió costear servicios de orientación y defensa jurídicas para unas 3.000 personas de grupos vulnerables de la población (en particular, presos y mujeres pobres) en siete ciudades.

El sistema judicial ordinario juzga a la mayoría de los acusados no pertenecientes a las fuerzas militares, aunque algunos grupos indígenas juzgan a sus miembros independientemente por infracciones de las reglas tribales. La ley permite que los tribunales militares o de la policía juzguen a acusados de las fuerzas militares o a agentes de policía en sesiones a puerta cerrada, de conformidad con los respectivos manuales sobre Consejo de Guerra de cada uno. Solamente la Corte Suprema de Justicia puede juzgar casos relacionados con oficiales con el grado de Almirante. A pesar de una disposición constitucional en virtud de la cual se asigna a los tribunales civiles jurisdicción sobre los oficiales militares y de la policía acusados de delitos penales, esos oficiales a menudo se juzgaron en tribunales militares o de la policía. El 7 de enero,

el Congreso enmendó la ley de seguridad nacional para exigir que se juzgue a todos los agentes de policía en los tribunales civiles ordinarios; sin embargo, la CEDHU sostuvo que no se hizo cumplir la ley enmendada.

Aunque en la ley se reconoce el derecho de las comunidades indígenas a ejercer sus propios sistemas de justicia según sus tradiciones y costumbres, no se detalla cómo se aplicarán. Este sistema paralelo dio lugar a varias preguntas sobre jurisdicción y conformidad con el derecho a un juicio justo.

#### Presos y detenidos políticos

No hubo ningún informe de presos o detenidos políticos.

#### Procedimientos judiciales civiles y medidas correctivas

Los juzgados civiles y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo general, considerados independientes e imparciales, tramitan las demandas de indemnización por daños y perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos o demandas de solicitud del cese de dichas violaciones. Sin embargo, raras veces se presentaron demandas civiles de indemnización por daños y perjuicios por causa de presuntas injusticias del Estado puesto que esas demandas exigían mucho tiempo y eran difíciles de procesar, ya que los jueces tomaban hasta 10 años para fallar con respecto a los méritos de cada caso.

#### f. Intromisión arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La Constitución y la ley prohíben esos actos y, por lo general, el Estado respetó esas prohibiciones en la práctica.

Aunque la intervención telefónica por la Policía Nacional para investigar delitos es legal con una orden judicial, no hay orientación específica sobre los procedimientos que deben seguirse para obtener dicha autorización.

### Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluso:

#### a. Libertad de expresión y de prensa

La Constitución estipula la libertad de expresión y de prensa, y el Estado, si bien critica a los medios de comunicación, por lo general ha respetado esos derechos en la práctica. Una prensa independiente y un sistema político ampliamente democrático se unieron para promover la libertad de expresión y de prensa. Los medios de comunicación independientes se mantuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin ninguna restricción obvia, aunque la Unión Nacional de Periodistas afirmó que la crítica del Presidente Correa a los medios de comunicación creó un cierto grado de autocensura.

El Presidente Correa usó a menudo su mensaje radiofónico semanal para criticar a los medios de comunicación y acusarlos de parcialidad, nombrando con frecuencia a determinados reporteros y

medios. Estos comentarios produjeron críticas de Reporteros sin Fronteras, una ONG internacional. En mayo el Presidente Correa invocó las “leyes de insulto” del país al presentar una demanda contra el presidente de la junta directiva del diario *La Hora* por un editorial publicado. El Presidente Correa y otros representantes del gobierno también amenazaron con revocar la licencia concedida a los medios de comunicación. El 10 de septiembre, por ejemplo, el diario *El Comercio* publicó una cita del Presidente a efectos de que la participación en un golpe de Estado sería motivo suficiente para suspender la concesión de la frecuencia de un canal de televisión.

Quinto Pazmiño, ex asesor del gobierno, presentó una demanda de \$10 millones contra el Presidente Correa por calumnia. Ulteriormente, las autoridades detuvieron a Pazmiño aduciendo como razones que había insultado al Presidente. El 23 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo a efectos de que Pazmiño, por ser candidato de la Asamblea, gozaba de privilegios especiales y, después del pago de una multa, quedó en libertad. A finales del año continuaba una investigación por parte del Procurador General del Estado.

No se dio a conocer ningún adelanto en la investigación del homicidio de dos periodistas ocurrido en febrero de 2006.

A veces, las presiones ejercidas por las empresas y los intereses privados, tanto de propietarios de los medios de comunicación como de empresas externas a los grupos de esos medios, influyeron en el contenido de los noticieros.

#### Libertad de acceso a Internet

No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso a la internet ni informes de que el Estado vigilara el correo electrónico ni las salas de tertulia virtuales en Internet. Cualquier persona o grupo podía participar en la expresión pacífica de opiniones por medio de Internet, incluso por correo electrónico. El acceso a Internet en las ciudades de mayor tamaño era amplio, pero en los sitios remotos era deficiente.

#### Libertad académica y actividades culturales

El gobierno no restringió la libertad académica ni las actividades culturales.

#### b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

##### Libertad de reunión

La Constitución estipula la libertad de reunión pacífica y, por lo general, el Estado respetó ese derecho en la práctica; sin embargo, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza y gas lacrimógeno para sofocar manifestaciones violentas, que dejaron varios heridos. Las reuniones públicas exigen previa autorización del gobierno que, por lo general, se concedió, con algunas excepciones.

No hubo ni se esperaba ningún adelanto en la investigación sobre la supresión policial de una manifestación de protesta en el colegio Jorge Mantilla Ortega de Quito en 2005, en la que un estudiante sufrió lesiones graves.

El 7 de marzo, las fuerzas armadas retiraron violentamente a varios integrantes de las comunidades Unión Alamoreña y 25 de Diciembre que hicieron una manifestación de protesta en un sitio de explotación de petróleo de Petrobras en la Provincia de Orellana. El ejército usó gas y balas de caucho, y siete manifestantes resultaron heridos.

El 13 de marzo, centenares de manifestantes se reunieron para exigir la resolución de la crisis causada cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) despidió a 57 miembros del Congreso. Uno de ellos y un periodista quedaron heridos cuando algunos de los manifestantes rompieron las barricadas de la policía y entraron a la cámara legislativa.

El 5 de junio, las comunidades indígenas hicieron una manifestación nacional de protesta contra la presencia de empresas transnacionales en el sector minero. Hubo grandes manifestaciones, que bloquearon algunas vías principales en las Provincias de Carchi, Imbabura, Azuay, Bolívar, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Cotopaxi. En algunos casos, la policía respondió con gas lacrimógeno.

#### Libertad de asociación

La ley estipula la libertad de asociación y, por lo general, el Estado ha respetado ese derecho en la práctica.

#### c. Libertad de culto

La Constitución estipula la libertad de culto y, por lo general, el Estado ha respetado ese derecho en la práctica.

El gobierno exige que los grupos religiosos estén autorizados o inscritos si participan en alguna actividad proselitista. Las organizaciones religiosas que no participan en esa actividad pueden optar por inscribirse para obtener personería jurídica, que es útil al firmar contratos. Cualquier organización religiosa que desee inscribirse con el gobierno debe tener una escritura de constitución y ser una entidad sin fines de lucro, incluir todos los nombres empleados por el grupo (para evitar que se empleen sin su autorización los nombres previamente inscritos) y proporcionar la firma de un mínimo de 15 miembros. Además, los grupos deben presentar una solicitud de inscripción en el Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades por medio de un abogado autorizado y pagar un derecho de inscripción de \$100.

#### Abusos sociales y discriminación

El país tiene una pequeña población judía. No hubo informes de abusos sociales, discriminación religiosa, ni actos de antisemitismo.

Véase un debate más detallado en el Informe sobre la libertad religiosa internacional de 2007 (*2007 International Religious Freedom Report*).

d. Libertad de movimiento, desplazados internos, protección de los refugiados y apátridas

La ley estipula la libertad de movimiento dentro del país, realización de viajes al extranjero, emigración y repatriación y, por lo general, el Estado ha respetado esos derechos en la práctica. Varios manifestantes bloquearon algunas vías, pero con menos frecuencia que en años anteriores.

Ya no se exige que los ciudadanos tengan permisos de salida del país, y el gobierno dejó de expedirlos el 29 de diciembre. Además, los hombres ya no deben comprobar que han terminado el servicio militar antes de salir del país.

La ley prohíbe el exilio forzado, y el Estado no lo impuso.

Protección de los refugiados

Las leyes estipulan la concesión de asilo o de refugio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en 1951, y su Protocolo de 1967, y el Estado ha establecido un sistema para conferir protección a los refugiados. El Estado concedió refugio o asilo. En la práctica, confirió protección contra la devolución, es decir, el envío de regreso de las personas a un país donde hay razón para creer que temen persecución. El Estado también confirió protección temporal a varias personas que quizá serían inadmisibles como refugiados dentro del marco de la Convención de 1951 o del Protocolo de 1967. El Estado cooperó con el ACNUR y otras organizaciones humanitarias, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en la prestación de asistencia a los refugiados y solicitantes de asilo. Eso incluyó atención a un gran número de colombianos que cruzaron la frontera del norte del Ecuador en enero, marzo y agosto.

El gobierno informó que al terminar el primer semestre del año, había recibido 5.792 solicitudes de refugio. Todavía estaban pendientes varios otros miles de casos del presente y de años anteriores. Los solicitantes rechazados tienen un derecho legal de apelación; después de haber agotado el recurso de apelación, tienen 30 días para poner en orden sus asuntos y salir del país. Si bien el ACNUR y el gobierno declararon que habían tenido dificultad para tramitar el número de solicitantes y de apelaciones, tanto el ACNUR como la OIM apoyaron los esfuerzos desplegados por la oficina nacional de refugiados para simplificar sus procesos de adopción de decisiones y de apelaciones y reducir el número de casos acumulados.

El ACNUR estimó que 97 por ciento de los 50.000 refugiados y solicitantes de asilo reconocidos eran de origen colombiano. Había un pequeño porcentaje de solicitantes peruanos que, según informes del ACNUR y del gobierno, eran principalmente emigrantes por razones económicas. En su mayoría, los refugiados colombianos eran campesinos pobres o pequeños empresarios que huían de la lucha en Colombia. La ley permite trabajar a las personas a quienes se concede refugio. La tarjeta de identidad expedida a los solicitantes de asilo indica explícitamente que los portadores tienen derecho a trabajar y a recibir atención de salud y educación. El ACNUR

informó que si bien más de 50.000 solicitantes de asilo se han inscrito con el gobierno (más de 14.800 de ellos reconocidos como refugiados) y recibido esta ayuda, hay miles de otros sin protección legal, cuyo acceso a los servicios públicos es limitado o nulo.

### Sección 3. Respeto de los derechos políticos: el derecho de la ciudadanía a cambiar su gobierno

La ley concede a la ciudadanía el derecho a cambiar su gobierno pacíficamente, y la ciudadanía ejerció ese derecho en la práctica por medio de elecciones periódicas, libres y justas sobre la base del sufragio universal.

#### Elecciones y participación política

Después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en octubre de 2006, Rafael Correa ganó en la segunda vuelta en noviembre de 2006 y asumió el poder el 15 de enero. Los observadores independientes, entre ellos, la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), describieron las elecciones, en términos generales, como libres y justas.

El Congreso de 100 escaños contaba con 31 mujeres. Entre los 31 miembros de la Corte Suprema de Justicia había dos mujeres, pero ningún miembro pertenecía a minorías étnicas. Siete mujeres formaban parte del gabinete de 23 miembros y tres eran secretarías de Estado con el rango de Ministro. En el gabinete había un ecuatoriano de origen africano y otro de origen asiático, pero no había personas indígenas.

El 15 de abril se celebró un referendo sobre el establecimiento de una Asamblea Constituyente; 82 por ciento de los votantes favorecieron el establecimiento de una Asamblea Constituyente que tuviera "poderes ilimitados para redactar una nueva Constitución". Después de un período de campaña de seis semanas, los votantes acudieron a las urnas el 30 de septiembre y dieron al movimiento Alianza PAIS del Presidente Correa 80 de 130 escaños. Los observadores de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter llegaron a la conclusión de que las elecciones habían sido libres y justas y que hubo solamente leves discrepancias.

La Asamblea Constituyente, reunida el 28 de noviembre, cerró el Congreso y asumió la función legislativa en el país hasta la conclusión del proceso de la Asamblea. El estatuto en virtud del cual se creó la Asamblea le da un período de seis meses para terminar su trabajo, con posible prórroga de dos meses. A fines del año, la Asamblea había adoptado una nueva ley para la equidad tributaria, pero no había adoptado ni terminado de redactar ninguna parte de la nueva Constitución.

#### Corrupción y transparencia del gobierno

La ley estipula la imposición de castigos penales por corrupción oficial; sin embargo, el gobierno no aplicó eficazmente la ley. Los indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial señalaron que la corrupción en el gobierno era un problema grave.

El 9 de julio, el poder ejecutivo presentó una demanda contra 18 miembros del Congreso presuntamente por tratar de intercambiar sus votos sobre un proyecto de ley para el sector bancario por puestos clave para sus aliados en instituciones públicas. La investigación estaba en curso a fines del año.

El 14 de agosto, el Congreso emitió una resolución en la que exigía que la Contraloría General del Estado verificara la declaración de renta de los 100 miembros del Congreso. El Presidente Correa presentó la declaración de renta. Este proceso estaba en curso a fines del año. El Congreso se cerró el 29 de noviembre antes de que todos los miembros presentaran la declaración de renta. La Asamblea Constituyente exigió que todos sus miembros presentaran la declaración de renta de 2006, una autorización para examinar sus cuentas bancarias en el Ecuador y en el extranjero, y una declaración juramentada de bienes a más tardar el 11 de enero de 2008. Al terminar el año, los miembros del Congreso todavía estaban presentando la documentación pertinente.

El Presidente Correa, quien anunció que una de las máximas prioridades de su gobierno sería la lucha contra la corrupción, decretó el 3 de marzo el establecimiento de la Secretaría Nacional Anticorrupción, que tendrá la responsabilidad de ejecutar la política sobre esa materia y de investigar cualquier acto de corrupción pública. La Secretaría afirmó haberle ahorrado al gobierno más de un millón de dólares con el descubrimiento de casos de despilfarro, fraude y abuso.

#### Sección 4. Actitud del gobierno sobre la investigación de presuntas violaciones de los derechos humanos hecha por organizaciones internacionales y no gubernamentales

Por lo general, varios grupos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos funcionaron sin restricción del gobierno en la investigación y publicación de sus comprobaciones sobre casos de violación de los derechos humanos. Los funcionarios públicos cooperaron con los grupos, pero a menudo se abstuvieron de obrar al conocer sus puntos de vista.

La Defensoría del Pueblo se concentró en problemas relacionados con los derechos humanos; sin embargo, algunos observadores criticaron su falta de independencia en la práctica. Esa oficina tenía suficientes recursos, pero no se consideró eficaz en cuestiones de derechos humanos.

El Congreso tiene un comité de derechos humanos formado por siete miembros. A pesar de la turbulencia en el Congreso, el comité se mantuvo comparativamente activo; celebró audiencias sobre la ejecución del Plan Nacional de Derechos Humanos, realizó seminarios en ciudades de todo el país y produjo un video de corta duración sobre la tortura.

El 3 de mayo, en virtud de un decreto presidencial se creó la Comisión de la Verdad, un órgano de cuatro miembros con la misión de investigar presuntas violaciones de los derechos humanos, particularmente durante el período 1984-1988, y de preparar un informe público.

#### Sección 5. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La Constitución prohíbe la discriminación por razones de raza, sexo, discapacidad, idioma o condición social; sin embargo, las mujeres, las personas con discapacidades, los pueblos indígenas, los afroecuatorianos, los homosexuales y los transexuales siguieron enfrentando discriminación.

### Mujeres

Aunque la ley prohíbe la violencia contra la mujer, incluso dentro del matrimonio, hubo abusos generalizados.

La ley penaliza la violación sexual, incluida la conyugal, y establece un castigo de hasta 25 años de cárcel. En casos de violación de menores, junto con relaciones sexuales "apasionadas" con un menor, el violador puede casarse con la víctima, lo que invalida las acusaciones, a menos que el matrimonio se anule posteriormente. El castigo por violación sexual en la que ha ocurrido una muerte es de 35 años de cárcel. Hasta julio, había 3.053 denuncias de violación sexual, que llevaron a formular acusaciones contra 459 personas. No se dispuso de información sobre el número de casos procesados con éxito. Muchas violaciones sexuales no se denunciaron por renuencia de la víctima a confrontar al autor material.

La ley establece multas por violencia doméstica de hasta \$28 o siete días de cárcel y confiere a los tribunales de familia la facultad de expulsar a un cónyuge abusivo del hogar si la cohabitación continua acarrea un riesgo para la víctima del abuso. Los tribunales también tienen facultades para expedir órdenes de restricción que prohíben que el cónyuge abusivo se acerque a la víctima o a su lugar de trabajo o de estudio; prohíben que el cónyuge abusivo persiga o intimide a la víctima o a cualquier miembro de su familia; reincorporan a la víctima al hogar familiar, si comparte un hogar común, y expulsan simultáneamente al cónyuge abusivo del sitio correspondiente; y prescriben cualquier tratamiento que se considere beneficioso para la familia afectada.

La Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades informó que hasta el 31 de octubre se habían denunciado 23.365 casos de maltrato sexual, psicológico o físico de mujeres y 3.281 casos en que las víctimas eran hombres. Treinta y una Comisarías de la Mujer y la Familia manejaron asuntos como la violencia doméstica. El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), entidad gubernamental, puede aceptar quejas sobre abuso de las mujeres, pero debe remitir los casos a la Fiscalía para las medidas de rigor. El CONAMU tenía proyectos en todas las provincias, concentrados principalmente en igualdad de oportunidades, programas de política pública referente a las mujeres y líneas de crédito para empresas dirigidas por mujeres. El CONAMU también ofreció servicios jurídicos y psicológicos a las víctimas de la violencia en casi todas las provincias. En algunas estaciones de policía, las víctimas recibieron asistencia de trabajadores sociales empleados por los gobiernos municipales u ONG. Varias ONG ofrecen asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de la violencia doméstica.

La prostitución es legal para las personas mayores de 18 años, siempre y cuando los burdeles tengan el registro del gobierno y sigan el reglamento sanitario. La trata de personas con fines de prostitución constituyó un problema.

A pesar de la prohibición legal del acoso sexual, varias organizaciones de defensa de los derechos de la mujer declararon que el acoso en el lugar de trabajo es común. El CONAMU está a cargo de formular políticas públicas para promover los derechos humanos de las mujeres y su igualdad en casos de acoso sexual.

A pesar de la protección legal de los derechos de la mujer en la política, el hogar y el lugar de trabajo, se observó una discriminación social generalizada de las mujeres, particularmente con respecto a oportunidades educativas y económicas para las de edad avanzada y las pertenecientes a las clases económicas más bajas. Aunque las mujeres gozan de la misma condición jurídica que los hombres, según informes de la Dirección Nacional de Género, en la práctica a las mujeres a menudo no se les conceden los mismos derechos que a los hombres. Según el gobierno, las mujeres recibieron aproximadamente 65 por ciento de la remuneración pagada a los hombres por un trabajo igual. Los defensores de las mujeres alegaron que la cultura y la tradición impedían el logro de plena igualdad para ellas. Se observó que el número de mujeres empleadas en ocupaciones profesionales y oficios especializados es menor que el de hombres.

El Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana incluyó a más de 320 organizaciones femeninas y promovió un cambio social, económico y cultural, incluso una mayor participación política de la mujer. El Consejo Nacional de las Mujeres prestó apoyo a cerca de 500 organizaciones femeninas, muchas de las cuales fomentaron la conciencia social y una mayor participación de la mujer en el proceso político. La Coordinadora Política de la Mujer, una ONG que funciona en las 22 provincias, también promovió los derechos de la mujer, con hincapié en la participación política y los derechos humanos.

### Niños

El Estado se comprometió a defender los derechos y el bienestar de los niños y ha aumentado el financiamiento para la salud y la educación de la población infantil; sin embargo, esas medidas no fueron plenamente eficaces.

La ley exige que los niños reciban un mínimo de 10 años de educación; no obstante, debido a la falta de escuelas, la escasez de financiamiento para las escuelas y el costo comparativamente elevado de los libros y uniformes, el gobierno raras veces hizo cumplir ese requisito. El Ministerio de Educación informó que, en su mayoría, los niños lograban estudiar hasta el sexto grado, sin ninguna diferencia notable en las tasas de asistencia de los varones y las niñas. El movimiento ciudadano Contrato Social para la Educación estimó que 660.000 niños de seis a 17 años (aproximadamente 22 por ciento de los niños de edad escolar) dejaron de asistir a la escuela. La educación era gratuita hasta terminar la escuela secundaria. Aunque el gobierno eliminó el pago de la matrícula de los estudiantes de primaria, el monto de la matrícula cobrada evitó que muchos niños y adolescentes asistieran a la escuela secundaria. Los programas públicos proporcionaron a las familias subsidios para educación, que ayudaron a mantener en la escuela a aproximadamente 50.000 niños. En las zonas rurales, muchos niños asistían a la escuela sólo esporádicamente después de los 10 años de edad porque necesitaban contribuir al ingreso familiar, sobre todo como agricultores.

El Estado proporcionó atención médica gratuita a los niños menores de seis años de edad. Los varones y las niñas tuvieron igualdad de acceso a esa atención. Según el Ministerio de Salud Pública, 95 por ciento de los niños recibieron inmunizaciones básicas, pero el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que 26 por ciento de los niños menores de cinco años sufrían los efectos de la malnutrición crónica.

No se observó ningún patrón social de abuso contra los niños.

La explotación sexual de menores con fines comerciales siguió constituyendo un problema.

Más de 20 ONG promovieron el bienestar infantil. El UNICEF y varias organizaciones privadas trabajaron activamente en programas de asistencia a los niños de la calle.

#### Trata de personas

Si bien las leyes penales prohíben la trata de personas, se informó que se realiza esa actividad dentro del territorio nacional, a través del mismo y con destino al país y al exterior.

El país fue una fuente, un punto de tránsito y un lugar de destino de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral. Según las estadísticas más recientes, provenientes de un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en 2003, se estima que 5.200 menores se dedicaban a la prostitución. Un informe de la OIT publicado en 2006 indicó que las víctimas se enviaban a Colombia y Venezuela y de Colombia al Ecuador; sin embargo, en su mayoría, las personas eran víctimas de trata dentro del país. Varios relatos indicaron que los tratantes de personas atraían a víctimas jóvenes con halagos románticos o con promesas de empleo legítimo y luego las forzaban a entrar a la prostitución. Según informes de prensa, algunos padres de familia indigentes también vendían a sus hijos para trata e incluso para entrar a la prostitución, realizar trabajos forzados en el sector agropecuario o pedir limosna en la calle.

Los tratantes eran pandillas de delincuentes organizados que se especializaban en el traslado de personas, dueños de pequeñas empresas como bares o prostíbulos o agentes de empleo ilícito. Algunas personas dispuestas a pagar hasta \$10.000 para salir clandestinamente del país también fueron víctimas de la trata de personas y las mujeres fueron vulnerables al abuso sexual por parte de los contrabandistas de personas. Las ONG y la prensa denunciaron varios casos en que los jueces liberaron antes de tiempo a los detenidos por trata.

Por lo general, a las víctimas se les atrajo con engaños al lugar donde luego fueron esclavizadas. Según informes, varias víctimas de Colombia cruzaron la frontera en camiones. Varios documentos falsificados del registro civil facilitaron la trata al ocultar la nacionalidad de las víctimas y la edad de los jóvenes.

La ley penaliza la trata de personas y estipula períodos de encarcelamiento de seis a 35 años. La ley también estipula castigos de seis a 12 años de cárcel por promover el turismo sexual en general y el infantil. Numerosas provincias y municipios tenían planes de acción contra la trata de personas, campañas de prevención de esa actividad y, en algunos casos, decretos pertinentes.

Hasta septiembre, había unos 160 casos de trata de personas en proceso judicial en espera de sentencia.

Las autoridades de Quito detuvieron a seis tratantes y rescataron a 11 víctimas en el caso "Dunky". Como parte de este caso, en mayo un tribunal sentenció a un hombre de 19 años a 12 años de cárcel y a su cómplice de 18 años a seis años de cárcel. Las víctimas, ambas niñas de 13 y 15 años de edad, habían sido atraídas con engaños para salir de su casa en una pequeña ciudad y llevadas a Quito con fines de explotación sexual.

En agosto, un tribunal de Quito sentenció a un hombre y a una mujer a 12 años de cárcel por trata de personas con fines de explotación sexual.

El fiscal de la Provincia de El Oro encargado de juzgar casos de trata de personas siguió realizando otros procesos judiciales con éxito. Un juicio iniciado en Machala en marzo llevó a la condena del dueño de un prostíbulo, quien fue sentenciado a 12 años de cárcel por la prostitución forzada de una menor de 15 años de edad.

El país aumentó el número de agentes del orden y de fiscales dedicados a combatir la trata de personas. En mayo de 2006, la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) creó una unidad de inteligencia sobre trata formada por ocho personas, cuya misión es trabajar con la policía, la Interpol y los fiscales. Esta unidad estaba en funcionamiento en la Provincia de Pichincha. En agosto, el gobierno creó y adiestró a una unidad de policía especializada de 36 miembros, distribuidos en siete ciudades importantes y dedicados a la protección de víctimas y testigos. En noviembre, el Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades y el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia comenzaron a realizar talleres de adiestramiento sobre la trata de personas para los jueces de los tribunales penales, los fiscales públicos, la DINAPEN y la Policía Judicial.

La DINAPEN realizó varios arrestos durante redadas en clubes nocturnos, bares y prostíbulos de Guayaquil, Machala, Quito y Santo Domingo de los Colorados.

En agosto, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (antiguo Ministerio de Bienestar Social) lanzó un Programa Nacional de Protección Especial, que incluye actividades contra la trata de personas en las Provincias de Chimborazo, Tungurahua y Canar. Además, el Ministerio de Turismo redactó un Manual de Responsabilidad Social por un Turismo Sostenible destinado a señalar a los directores de excursiones la importancia de proteger los derechos de los niños y los adolescentes y la función de las comunidades locales.

Los menores dedicados a la prostitución fueron devueltos a sus respectivas familias o a ONG sin ser detenidos. Se han encontrado albergues y servicios para las víctimas y se ha adiestrado al personal de esos albergues. El programa de protección a las víctimas y testigos establecido por el Ministerio Público prestó asistencia a las víctimas de la trata de personas con ofrecimiento de albergue, atención médica y psicológica, protección policial y asistencia económica y laboral a quienes estuvieran dispuestas a ayudar en las investigaciones. Cinco albergues de las Provincias de Azuay, Pichincha y El Oro ofrecieron asistencia especializada a más de 120 víctimas de explotación sexual con fines comerciales.

En mayo el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración patrocinó una exposición del proyecto cinematográfico K-11 sobre la trata de seres humanos. En septiembre, varias organizaciones de la sociedad civil patrocinaron un seminario-taller sobre periodismo investigativo con responsabilidad social, de dos días de duración, que incorporó la trata de personas como uno de sus campos temáticos.

#### Personas con discapacidades

La Constitución prohíbe la discriminación de las personas con discapacidades físicas y mentales en el empleo, la educación, el acceso a la atención de salud y la prestación de otros servicios públicos. El Consejo Nacional de Discapacidades, un organismo interinstitucional, supervisa las políticas gubernamentales referentes a las personas con discapacidades. Aunque la ley decreta el acceso a edificaciones para las personas con discapacidades, el gobierno no la hizo cumplir.

Para las elecciones de la Asamblea Constituyente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no imprimió papeletas en el sistema Braille, pero permitió que las personas invidentes recibieran asistencia de un familiar durante la votación. El TSE proporcionó intérpretes de lenguaje de señas e hizo todo lo posible para asegurar que los puestos de votación fueran totalmente accesibles para las personas con discapacidades. Si bien la accesibilidad a algunos puestos de votación fue difícil, muchas personas con discapacidades recibieron ayuda de las fuerzas militares y de otras instituciones para asegurarse de que pudieran acceder a sus respectivas mesas de votación.

La ley exige la contratación de personas con discapacidades en todas las empresas públicas y privadas con más de 25 empleados; sin embargo, no se dispuso de información sobre su cumplimiento. La iniciativa "Ecuador sin barreras", encabezada por el Vicepresidente Lenin Moreno, ayudó a crear 1.184 empleos para personas con discapacidades al final del año.

#### Minorías nacionales, raciales y étnicas

Los ciudadanos afroecuatorianos, cuyo número se estima en 600.000, sufrieron discriminación generalizada, particularmente con respecto a oportunidades educativas y económicas.

El Centro Cultural Afroecuatoriano estimó que 70 por ciento de los afroecuatorianos viven en situación de pobreza. Varias organizaciones afroecuatorianas señalaron que, a pesar de la ausencia de discriminación oficial, la discriminación social, incluida la fijación de estereotipos, siguió afectando a ese grupo. Por ejemplo, siguieron afirmando que la policía detenía a los afroecuatorianos para verificación de documentos con más frecuencia que a otros ciudadanos y que los empleadores a menudo dejaban de entrevistar a personas cuya solicitud de empleo llevaba fotografías de afroecuatorianos. El gobierno no puso particular empeño en abordar estos problemas.

#### Pueblos indígenas

Las estimaciones del número de personas que mantenían su identidad cultural indígena y vivían en comunidades indígenas variaron de 7 a 20 por ciento de la población. La gran mayoría de los ciudadanos indígenas residía en zonas rurales, incluso en zonas montañosas y provincias de la Amazonia. A pesar de su creciente influencia política y de los esfuerzos de los grupos comunitarios de base, que tuvieron cada vez más éxito en presionar al gobierno para ayudarles, los pueblos indígenas siguieron sufriendo discriminación en muchos estratos de la sociedad. Con pocas excepciones, los pueblos indígenas se situaron en el extremo más bajo de la escala socioeconómica.

La tierra cultivable era escasa en las zonas montañosas más densamente pobladas, donde la alta tasa de mortalidad infantil, la malnutrición y las enfermedades epidémicas eran comunes entre la población indígena. A menudo había falta de electricidad y agua potable. Aunque el sistema de educación rural presentó graves deficiencias, muchos grupos indígenas participaron con el Ministerio de Educación en la creación del programa de educación bilingüe seguido en las escuelas públicas rurales.

La ley reconoce los derechos de las comunidades indígenas a tener propiedad en común, a administrar justicia comunitaria tradicional en ciertos casos y a que se les consulte antes de explotar recursos naturales en territorios comunales. Además, los pueblos indígenas tienen los mismos derechos civiles y políticos que otros ciudadanos. En la región amazónica, los grupos indígenas presionaron al gobierno, consiguieron la ayuda de ONG nacionales y extranjeras y organizaron protestas para tratar de ganar una parte de los ingresos provenientes del petróleo y hacer oír su voz en las decisiones referentes al uso de recursos naturales y al desarrollo.

Por lo general, el gobierno consultó a las comunidades indígenas con respecto a asuntos referentes al uso de recursos naturales. Aunque las compañías petroleras intensificaron sus esfuerzos para reducir a un mínimo el efecto ambiental y social de sus proyectos de explotación petrolífera en la región amazónica, se siguió causando daño al medio ambiente, particularmente, deforestación. La existencia de autoridades locales corruptas, la falta de voluntad política y las divisiones entre varias comunidades indígenas y dentro de ellas minaron los esfuerzos de esas comunidades para manejar el tráfico de madera ilegalmente talada.

La Defensoría del Pueblo tenía representantes en las comunidades indígenas de todo el país, a quienes se asignó la responsabilidad de promover el respeto a los derechos humanos y de otra índole en las comunidades indígenas y de prestar determinados servicios de asesoramiento a esos grupos.

#### Otros abusos sociales y discriminación

Aunque la ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, los homosexuales, transexuales y travestis siguieron sufriendo discriminación por parte de varios órganos públicos y privados.

Según Kirmirina, una ONG digna de credibilidad, la policía sometió a varios homosexuales, transexuales y travestis a trato cruel, inhumano y degradante. Esa ONG acusó a la policía de centrarse específicamente en ellos y de convertirlos en blanco de abuso físico y psicológico,

amenazas, extorsión y robo. Por lo común, la policía arrestó a homosexuales y travestis en lugares públicos.

El 20 de diciembre, el Municipio de Quito expidió un decreto de apoyo a los derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual.

## Sección 6. Derechos de los trabajadores

### a. El derecho de asociación

Si bien la ley concede a casi todos los trabajadores el derecho de formar sindicatos de su elección y de afiliarse a ellos, las medidas de protección jurídica de esos derechos fueron inadecuadas y, a veces, dejaron de disuadir a los empleadores de tomar represalias contra los trabajadores por organizarse. Los miembros de la policía, las fuerzas militares y la mayoría de los empleados del sector público carecían de libertad para formar sindicatos. Aproximadamente dos por ciento de la fuerza de trabajo estaba organizada.

La ley concede a los trabajadores subcontratados el derecho de libertad de asociación, el derecho de negociación colectiva y el derecho de protección jurídica contra la discriminación de los sindicatos. La ley fija en 30 el número de trabajadores necesarios para que un establecimiento pueda sindicalizarse. Algunas compañías aprovecharon esa ley mediante subcontratación con sociedades ficticias, cada una de las cuales tenía menos de 30 trabajadores.

Si bien los empleados de las organizaciones estatales gozaban de derechos similares a los de los empleados del sector privado, la ley prohíbe a la mayoría de los empleados del sector público la afiliación a sindicatos o el ejercicio de los derechos de negociación colectiva. En su mayoría, los funcionarios públicos mantuvieron su afiliación a una asociación del sector laboral; no se permite que dichas asociaciones hagan huelga ni participen en negociaciones colectivas.

El código laboral exige representación de los trabajadores de las empresas estatales por un solo sindicato. La ley no exige la reincorporación de los trabajadores despedidos por causa de la actividad antisindical de las empresas, pero impone indemnización y multas. La ley no protege a los trabajadores de la discriminación antisindical en la contratación. Al terminar el año estaba pendiente el caso de indemnización presentado por 48 trabajadores de la empresa naviera Transnavo, que fueron despedidos en septiembre de 2006 después de tratar de sindicalizarse.

### b. El derecho de organización y negociación colectiva

La ley exige que todos los empleadores privados que tengan 30 o más trabajadores pertenecientes a un sindicato negocien colectivamente cuando el sindicato así lo exija. Los acuerdos de negociación colectiva cubrieron a 25 por ciento de la fuerza de trabajo organizada. En su mayoría, la población económicamente activa estaba empleada en el sector agropecuario o en el sector informal urbano; esos trabajadores, en una gran mayoría, no estaban organizados. La ley permite que las empresas empleen trabajadores con contratos individuales.

Muchos empleados recién contratados, particularmente en el sector agropecuario, trabajaban con contratos temporales. En la práctica, era difícil organizar a los trabajadores temporales con contratos a corto plazo. Puesto que el código laboral no reconoce a los trabajadores temporales, ellos no gozaron del mismo grado de protección ofrecido a otros trabajadores.

Hubo pocas restricciones del derecho de huelga de los trabajadores del sector privado, a pesar de exigirse un período de 10 días antes de poder declarar una huelga. La ley permite hacer huelgas de solidaridad o boicoteos de tres días si el Ministerio de Trabajo y Empleo las autoriza. En algunas industrias, durante una huelga legal, los trabajadores pueden asumir control de la fábrica o del lugar de trabajo (con lo que termina la producción en ese sitio) y recibir protección de la policía durante la toma de control. Sin embargo, en otras industrias, como la agropecuaria, la ley exige un período de espera de 20 días a partir del día de declaración de la huelga. Durante ese período, los trabajadores y empleadores deben ponerse de acuerdo con respecto al número de trabajadores necesarios para asegurar un determinado nivel de servicio y por lo menos 20 por ciento de la fuerza de trabajo debe seguir desempeñando sus funciones con el fin de prestar los servicios esenciales. La ley determina "la facultad del empleador de contratar personal sustituto" solamente cuando los huelguistas se nieguen a enviar el número de trabajadores necesarios para prestar los servicios mínimos necesarios, aunque en la práctica esta ley no se hizo cumplir. La ley protege a los huelguistas y a sus dirigentes contra represalias.

La Ley priva del derecho de huelga a la mayoría de los trabajadores del sector público (acogidos a la ley de administración pública). Incluye una disposición a efectos de que los trabajadores del sector público en huelga están sujetos a encarcelamiento de dos a cinco años; sin embargo, de vez en cuando hubo huelgas "ilegales", incluso de maestros de las escuelas públicas y de trabajadores de salud. Se prohíbe la negociación colectiva a los trabajadores del sector público.

La ley permite la contratación de trabajadores temporales para industrias maquiladoras (elaboración en depósitos aduaneros para exportación). El sistema de maquiladoras permite que una compañía y los bienes de su propiedad se conviertan en una zona de elaboración para exportación dondequiera que se encuentren. En las maquiladoras no había sindicatos ni asociaciones de trabajadores. Casi todos los trabajadores han recibido contratos temporales del empleador para terminar un pedido determinado.

c. Prohibición de trabajo forzado u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluso el infantil; sin embargo, hubo denuncias de trata de niños con fines de trabajo.

d. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley prohíbe la explotación de los niños en el lugar de trabajo y el trabajo forzado u obligatorio; sin embargo, el gobierno no hizo cumplir eficazmente la ley y el trabajo infantil siguió constituyendo un problema.

El código laboral y el código de la niñez y la adolescencia fijan en 15 años la edad mínima para desempeñar todo tipo de trabajo y en seis horas diarias y cinco días por semana el número

máximo de horas que puede trabajar un menor. La ley enumera 15 trabajos que no son apropiados para los niños y prohíbe que los menores trabajen en condiciones peligrosas, incluso en minas o en empleos que exijan exposición a sustancias tóxicas o peligrosas. La ley exige que los empleadores paguen a los menores por lo menos 80 por ciento de los salarios que reciben los adultos por el mismo tipo de trabajo. Los castigos por infracciones de las leyes de trabajo infantil incluyen multas de \$50 a \$300 para los padres o tutores, multas de \$200 a \$1.000 para los empleadores a los que se compruebe que han contratado a adolescentes de 15 a 17 años y multas de \$1.000 para cualquier empleador que contrate a niños menores de 15 años. En casos de infracciones repetidas, se puede cerrar el negocio del empleador.

El Ministerio de Trabajo y Empleo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Tribunal de Menores se encargaron de hacer cumplir las leyes de trabajo infantil, y su aplicación siguió mejorando, pero no fue plenamente eficaz. Un estudio realizado en 2006 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo reveló que 367.000 niños de cinco a 14 años desempeñaban trabajos no permitidos por la ley, principalmente en las zonas rurales en el sector informal, en comparación con 550.000 en 2006.

Los 28 inspectores de trabajo infantil nombrados por el gobierno examinaron varios lugares donde se empleaba mano de obra infantil; esos inspectores tenían autoridad para expedir citaciones por infracciones y sancionar a las empresas y a los empleadores a los cuales se comprobara que habían contratado mano de obra infantil ilegalmente. Entre enero y julio, el Ministerio de Trabajo y Empleo expidió 100 citaciones a empleadores por infracciones de las leyes de trabajo infantil. Hasta fines de diciembre, los inspectores realizaron cerca de 2.242 inspecciones de lugares de trabajo y encontraron cerca de 198 menores de 17 años que trabajaban en condiciones de infracción de las leyes laborales. Todos los casos se remitieron a las autoridades legales pertinentes, aunque ninguno se había resuelto al terminar el año.

La Unidad de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo y Empleo, formada por tres funcionarios, se reúne mensualmente con otras unidades del Ministerio y con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, que incluye organismos gubernamentales, empresas y organizaciones laborales.

Si bien la Unidad de Servicio Social Laboral del Ministerio de Trabajo y Empleo vigiló el trabajo infantil en empresas tales como fábricas, la aplicación de la ley en la mayoría de los sectores de la economía siguió siendo limitada. En las zonas urbanas, muchos niños menores de 15 años trabajaban en empresas de propiedad familiar en el sector informal, como lustrabotas, en recolección y reciclaje de basura o como vendedores ambulantes. Otros niños trabajaban en el comercio, servicios de mensajería y servicios domésticos o pedían limosna. Algunos niños muy pequeños, de cinco o seis años, a menudo vendían periódicos o dulces en la calle para su propio sustento o para aumentar el ingreso familiar.

El gobierno apoyó el Programa de Escolarización, Protección y Educación a Niños Trabajadores, que ejecutó un programa de talleres en seis ciudades para trabajar con las familias y las escuelas en el problema del empleo infantil.

- e. Condiciones de trabajo aceptables

El Ministerio de Trabajo y Empleo fija periódicamente el salario mínimo en consulta con la Comisión de Salarios Mínimos, pero el Congreso también puede ajustar el salario mínimo. El salario mínimo junto con las bonificaciones obligatorias proporcionó una remuneración mensual bruta de unos \$186, o sea un dólar por hora, en el caso de los trabajadores contratados. El salario mínimo legal no proporcionó un medio de vida decente para un trabajador y su familia. La mayoría de los trabajadores organizados en industrias estatales y en empresas privadas del sector formal devengaron ingresos mucho mayores que el salario mínimo y también recibieron otras prestaciones sociales importantes por medio de acuerdos de negociación colectiva. Sin embargo, en su mayoría, los trabajadores estaban empleados en el extenso sector informal y rural, sin obtener el salario mínimo ni las prestaciones sociales establecidas por la ley.

La ley estipula una semana laboral de 40 horas y dos días consecutivos de descanso por semana. Si se exige que la persona trabaje en exceso de la semana laboral establecida, los trabajadores deberán recibir pago por horas extraordinarias. Se fija una tasa de pago mayor por horas extraordinarias de trabajo nocturno. El máximo número de horas extraordinarias fue de 12 por semana que, por lo general, se respetó, excepto en compañías subcontratistas en las que se exigía a veces a los empleados que trabajaran hasta 28 horas extraordinarias por semana. El Ministerio de Trabajo y Empleo no desplegó suficientes recursos para hacer cumplir las leyes laborales.

La ley también estipula la protección general de la salud y la seguridad de los trabajadores en el empleo. El Instituto Ecuatoriano de Seguro Social tiene bajo su responsabilidad la aplicación de las normas y reglamentos de salud y seguridad. En el sector formal, la salud y la seguridad ocupacionales no fueron un problema importante. Sin embargo, no había ningún reglamento específico con respecto a normas de salud y seguridad en el sector agropecuario y, en la práctica, no se hicieron cumplir las reglas de seguridad en las minas pequeñas que constituyen la gran mayoría de las empresas del sector minero.

No se permite abandonar el lugar de trabajo por razones de salud, ni siquiera en una situación peligrosa. Se permite que un trabajador solicite que un inspector del Ministerio de Trabajo y Empleo confirme un peligro en el lugar de trabajo; acto seguido, ese inspector puede cerrar el lugar de trabajo. El tiempo de respuesta de los inspectores osciló entre tres días en las ciudades principales y períodos más prolongados en el campo.